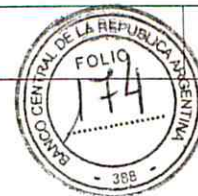


B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.549/10 Act.	1
----------	--	---



RESOLUCIÓN N° 655

Buenos Aires, 10 SEP 2013

VISTO:

I.- El presente Sumario en lo financiero N° 1357, Expediente N° 101.549/10, dispuesto por Resolución N° 411 del 11.09.12 (fs. 121/122), sustanciado en los términos del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, el que tramita en forma sumarísima, que se instruye para determinar la responsabilidad de Ford Credit Compañía Financiera S.A. (CUIT N° 30-51654454-2) y del señor Daniel Ricardo Bona (DNI N° 13.416.837) por su actuación en la entidad.

II.- El Informe N° 381/197/12 (fs. 111/114), como así también los antecedentes instrumentales glosados a las actuaciones que dieron sustento a la imputación consistente en: "Presentación fuera de plazo de la documentación relacionada con la designación de autoridades", en transgresión a lo dispuesto por la Comunicación "A" 3700, CREFI 2-36. Anexo, punto 1, subpunto 5.2.

III.- Las personas sumariadas que son Ford Credit Compañía Financiera S.A. (CUIT N° 30-51654454-2) y el señor Daniel Ricardo Bona (DNI N° 13.416.837).

IV.- Las notificaciones efectuadas, vistas conferidas, descargos presentados y documentación agregada al expediente, las que obran a fs. 129/159, y

CONSIDERANDO:

I.- Que, con carácter previo a la determinación de las responsabilidades individuales, corresponde analizar la imputación formulada en autos, los elementos probatorios que la avalan y la ubicación temporal de los hechos que la motivan.

1.- De acuerdo con lo expresado en el Informe de propuesta de apertura sumarial N° 381/197/12, en el marco del análisis de diversas presentaciones realizadas por Ford Credit Compañía Financiera S.A. con motivo de la evaluación de idoneidad y experiencia de sus nuevos directivos, la Gerencia de Autorizaciones advirtió que la entidad habría transgredido las normas de aplicación en la materia, al haber presentado la documentación exigida sobre el particular fuera de los plazos establecidos por la Comunicación "A" 3700 (fs. 1/3 -puntos 1, 2.2 y 2.3- y fs. 6/9).

Al respecto, en el informe de la referencia se indica que, mediante nota ingresada el 30.06.09, suscripta por el vicepresidente de la compañía -señor Daniel Ricardo Bona (fs. 40)-, se hizo llegar a este Banco Central copia del Acta N° 54 de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 05.05.09, en la cual se resolvió la designación de un nuevo Director Titular, señor Antonio Martínez (fs. 2 -punto 2.2.2- y fs. 41/45). Con la referida presentación se completó la documental requerida normativamente relacionada con la nueva designación efectuada (fs. 2 -punto 2.2.2-), quedando de



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 101.549/10 Act.	2
<p>manifiesto que la fiscalizada no habría respetado el plazo acordado normativamente al efecto (10 días a partir de la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas donde se efectuó la designación - conf. Comunicación "A" 3700, punto 1, subpunto 5.2.1.2-), el cual, considerando la fecha de la designación aludida -05.05.09-, habría operado el 15.05.09.</p> <p>A modo de antecedente la instancia que formuló el cargo indica que la compañía financiera anteriormente había incurrido en apartamientos de igual naturaleza, al presentar la documentación relacionada con designaciones de nuevos directivos fuera de los plazos establecidos por la normativa financiera aplicable (Informe N° 382/468 de fecha 19.03.08 -fs. 28/30-). En este sentido, señala que en las Asambleas Ordinarias de Accionistas celebradas los días 30.05.06, 23.03.07 y 17.12.07 (Actas N° 50, 51 y 52, respectivamente, -fs. 13/17, 18/23 y fs. 24/27-), se designaron nuevos directivos. La evaluación de la idoneidad y experiencia de estos funcionarios tramitó por Expediente N° 19.486/06 (fs. 1/2 -punto 2.2.1-). El aporte de la documentación requerida para las designaciones referidas fue completado el 11.01.08, luego de vencido el plazo fijado por la normativa de aplicación (fs. 2 -punto 2.2.3- y fs. 108 -Ref. Expediente N° 19.486/06-).</p> <p>No obstante el antecedente expuesto, Ford Credit incurrió en nuevas demoras al presentar ante este Banco Central la documentación pertinente para evaluar los antecedentes del señor Anton. Martínez, designado como nuevo Director en fecha 05.05.09 (Informe N° 382/1747 del 05.10.09 -fs. 48/50-), razón por la cual se le envió nota haciéndole saber que dicho incumplimiento motivaría la apertura del sumario previsto por el artículo 41° de la Ley de Entidades Financieras. La mencionada nota y el acuse de recibo obran a fs. 46/47.</p> <p>Los hechos descriptos fueron tratados pormenorizadamente por la dependencia de origen a través de su Informe N° 382/1747/09 (fs. 48/50) e Informe Presumarial N° 382/2206/10 (fs. 1/5).</p> <p>Por lo tanto, en atención a los aspectos analizados precedentemente y las constancias obrantes en autos que le sirve de sustento, la instancia pre-interviniente concluyó que Ford Credit Compañía Financiera S.A. habría presentado la documentación relacionada con la designación de un nuevo directivo, fuera de los plazos establecidos por la normativa financiera aplicable, reiterando un obrar antinormativo observado con anterioridad.</p> <p>2.- La instancia que propuso la apertura sumarial determinó que la infracción se había verificado entre los días 18.05.09 y 30.06.09, considerando la fecha en que operó el plazo para presentación de la documentación exigida normativamente -respecto de la designación del Sr. Martínez- y aquella en que efectivamente se habría cumplimentado dicha presentación.</p> <p>Al respecto, hizo notar que para el cómputo del período infraccional indicado tuvo en cuenta lo dispuesto por la Comunicación "A" 2241, parte resolutoria, último párrafo, en cuanto a que "...en todos los casos en que establezcan plazos expresados en días, estos deberán considerarse en forma corrida...". No obstante, cabe señalar que, siendo inhábiles los dos días siguientes al vencimiento del plazo acordado por la normativa aplicable, tornando imposible que en esas fechas se cumplimente la presentación de la documentación requerida, el período infraccional se consideró a partir del primer día hábil posterior al vencimiento aludido.</p> <p>También indica que los hechos descriptos constituyen una trasgresión de lo dispuesto por la Comunicación "A" 3700, CREFI 2-36, Anexo. Punto 1, subpunto 5.2.</p>			



B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 101.549/10
Act.

3

II.- Que a continuación corresponde exponer y analizar el descargo presentado por los sumariados y determinar las responsabilidades que les pudieran corresponder.

A) Exposición del descargo:

1.- Los sumariados presentaron en forma conjunta el descargo que se encuentra glosado a fs. 139/143, en el que señalan que el presunto período infraccional debe ser reducido un día porque la nota del 30.06.09 a la que alude el informe de cargo en realidad fue presentada el día 29.06.09.

También solicitan que se considere que la documentación presentada requería un tiempo considerable para su preparación, que la información necesaria era relativa a los sujetos informados por lo que su obtención no dependía de ellos y que la entidad posee una estructura de revisiones interna -a los efectos de evitar presentaciones incompletas o con falta de análisis-, que causaron la presunta demora en la presentación.

Sostiene que, dada la naturaleza de la documentación e información requerida, el plazo de 10 días otorgado era sumamente reducido, por lo que el BCRA, dando cuenta de ello, duplicó dicho plazo mediante la Comunicación "A" 5345. Entienden que el nuevo plazo de 20 días debe ser considerado en el presente caso, en virtud del principio de la ley penal más benigna el que resulta aplicable dada la naturaleza evidentemente penal del régimen sancionatorio previsto en el artículo 41 de la Ley N° 21.526, citando jurisprudencia y doctrina al respecto.

Además, entienden que debe ponderarse que se trata de una infracción mínima por su naturaleza eminentemente forma, que es exiguo plazo excedido, que no causó perjuicio alguno a terceros ni generó beneficio actual ni potencial a los sumariados.

Por otra parte, señalan que la infracción citada como antecedente fue exigua.

3.- En cuanto a la responsabilidad del señor Bona, señalan que si bien la normativa aplicable menciona al presidente como firmante de la presentación, no es éste sino el personal a su cargo quien efectúa el seguimiento, presentación y la coordinación de la presentación. Por ese motivo, en la realidad de los hechos, no existe una inacción del Presidente puesta de manifiesto a través de una conducta omisiva y complaciente.

Además el incumplimiento previo alegado como antecedente no puede ser considerado un agravante particular hacia el señor Bona por ser anterior a la fecha en que el nombrado comenzó a ejercer la presidencia de la entidad -01.05.09-. Por lo tanto, no se lo podría responsabilizar por la presentación presuntamente tardía invocada en el informe.

4.- Por último, efectúan reserva del caso federal.

5.- **Prueba:** Se advierte que los sumariados sostienen que acompañan copia de la nota presentada por Ford Credit ante el Banco Central con fecha 29.06.09, no obstante tal constancia no fue adjuntada al descargo.

B) Análisis de los argumentos defensivos:

1.- En primer lugar, corresponde señalar que no procede efectuar la reducción del período determinado como infraccional pues no se ha incorporado ninguna constancia que demuestre que la documentación relacionada con la designación del señor Antonio Martínez, como director de la



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 101.549/10 Act.	4
<p>compañía financiera, fue presentada el día 29.06.09 y no el 30.06.09, como atestigua el sello inserto en la nota respectiva, cuya copia se halla glosada a fs. 40.</p> <p>En segundo término, cabe recordar que para satisfacer la exigencia normativa la información requerida debió ser proporcionada en tiempo y forma, siendo responsabilidad de los imputados arbitrar las medidas tendientes a asegurar el correcto cumplimiento de ambos aspectos. En este orden se advierte que si bien la información suministrada fue completa y sin faltas, los interesados no alegan ni prueban circunstancias concretas que hayan impedido entregarla en el plazo estipulado reglamentariamente.</p> <p>La posterior modificación del plazo en cuestión no exime de las responsabilidades surgidas a partir de infracciones a la normativa financiera ya materializadas, pues debe tenerse presente que las sanciones en la materia, previstas en el artículo 41 de la Ley N° 21.526, no participan de las medidas represivas establecidas por en el Código Penal, por lo que no resulta aplicable al “sub lite” el principio de ley penal más benigna.</p> <p>En ese sentido se expresó la jurisprudencia al sostener que “... la aplicación de sanciones por parte del Banco Central de la República Argentina no constituye ejercicio de la jurisdicción criminal (Fallos 303:1776; 305:2130). Como regla, no corresponde la aplicación indiscriminada de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, pues el primero parte de la premisa de la mínima intervención estatal dirigida exclusivamente a la represión de aquellas conductas de los particulares que merecen el máximo reproche legal, mientras que el segundo constituye el respaldo efectivo de la intervención estatal en la mayoría de los ámbitos sujetos a regulación administrativa y el medio necesario para asegurar su cumplimiento” (“Ferrero, Jorge O. y otros v. B.C.R.A”, Buenos Aires, 04.12.08).</p> <p>En el mismo sentido se ha señalado que “En lo referente a la pretendida aplicación al sub discussio de los principios generales del Derecho Penal, ha de señalarse que las sanciones bajo examen tienen carácter disciplinario y no participan de las medidas represivas del Código Penal (Fallos 241:419; 251:343; 268:98; 275:265; entre muchos otros). Las correcciones disciplinarias, como tales, no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas y, por ende, no es de su esencia que se apliquen, sin más, las reglas del derecho penal, ni se requiere el dolo, ya que las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión (conf. sala 3ª, “Bunge Guerrico” y “Banco Serrano Coop. Ltda.”, 3/5/1984 y 15/10/1996 respectivamente).”</p> <p>“Desde esta perspectiva, deviene palmariamente improcedente la pretendida asimilación del régimen especial aplicable en la materia de autos con el derecho penal (conf. esta Sala, “Banco Regional del Norte Argentino S.A v. BCRA - Res. 287”, 6/4/1993, y “Galarza, Juan Alberto v. BCRA”, 1/9/1992; entre muchos otros).” -Antúnez, Norberto A. y otros v. BCRA, C.N.A.C.A.F., Sala II, sentencia del 02.08.12-.</p> <p>En un fallo anterior, la misma Sala había manifestado que “En cuanto a la naturaleza de las sanciones que el Banco Central se encuentra habilitada para aplicar conforme a la ley de entidades financieras, tiene carácter administrativo y, por ende, carecen de contenido penal, por lo que la cláusula del Pacto de San José de Costa Rica no opera (art. 8, inc. 1, CADH), ya que se refiere a supuestos de acusación penal (sala 1ª “Bassi” del 22/11/1994)” (CNACAF, Sala II, sentencia del 14.06.2012 en re “Pak, Celia E. v. BCRA”).</p> <p>Tampoco importa el carácter formal de la infracción ni la ausencia de perjuicios a terceros o de beneficios para los infractores ya que “la responsabilidad en la materia sub-examine no requiere</p>			



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.549/10 Act.	5
<p><i>la existencia de un daño concreto (pasado, actual o futuro) derivado del comportamiento irregular, pues el interés público se ve afectado aún por el perjuicio potencial que aquél pudiere ocasionar (conf. Sala III, in re, "Banco Patagónico S.A. del 17/10/1994 y esta Sala, in re, "Banco Regional del Norte Argentino S.A", del 06/04/1993)."</i></p> <p><i>"Por lo tanto, deben descartarse este tipo de argumentos con los que se pretende la eximición de responsabilidad. A ello debe adicionarse que, dado el carácter técnico administrativo de las irregularidades en cuestión, su punibilidad surge de la contrariedad objetiva de la regulación y el daño potencial que de ello se derive, resultando que tanto la existencia de dolo como el resultado son indiferentes (conf. Sala III, in re, "Pérez Álvarez, Mario A. c/resol 402/83 BCRA", del 04/07/86)."</i></p> <p><i>"Es que el sistema normativo que rige la actividad de las entidades financieras prevé que las infracciones en él consagradas se produzcan sólo por el potencial daño que provoque una actividad emprendida sin cumplir con las exigencias legales, por lo que carece de toda entidad, a los efectos de la aplicación de sanciones, la falta de un efectivo daño a los intereses públicos y privados que el sistema legal tiende a preservar (conf. Sala III, in re, "Cía. Franco Suiza de Inversiones S.A", del 07/10/82 y esta Sala, in re, "Martínez, Julio", citado)".</i></p> <p><i>"En tales condiciones, no resulta sobreabundante reiterar que lo importante a tener en cuenta aquí reside en la circunstancia de que se ha transgredido la regulación. No importa si se ha generado un daño cierto, ni si se ha actuado con dolo (elemento subjetivo), pues en el caso basta con que se compruebe la conducta infraccional para tener por acreditada la falta." (Expte. N° 15808/2011, "Daimlerchrysler Cía. Financiera S.A. y otros c/BCRA-Resol 53/11 (Expte. 100.005/02 SUM FIN 1066)", CNACAF, Sala II, 26.09.2011).</i></p> <p>Asimismo y sin pretender ahondar en el análisis de los hechos citados como antecedente, pues ello excedería el objeto de este sumario, debe señalarse que resulta indiferente el tiempo de la demora, en tanto los mismos son demostrativos de que la normativa que nos ocupa no era observada adecuadamente en el ámbito de la compañía financiera y que esa actitud continuó a pesar de haberse advertido que la reiteración de ese incumplimiento motivaría la apertura del sumario correspondiente (fs. 29, 4 párrafo).</p> <p>2.- Por otra parte, la defensa intentada con relación al señor Bona resulta insuficiente para eximirlo de la responsabilidad que cabe atribuirle por el incumplimiento de una obligación que expresamente le estaba encomendada, en su carácter de presidente de la compañía financiera (Comunicaciones "A" 2910 y "A" 3700).</p> <p>En ese sentido, cabe señalar que la exigencia de que sea el presidente de una entidad financiera quien suscriba la nota de propuesta y aporte la documentación relacionada con la designación, entre otros, de los directores de la misma, se relaciona directa y estrechamente con la relevancia ínsita en el cargo en cuestión, por lo que resulta inadmisibles que se pretenda excusar esa responsabilidad haciéndola recaer en personal de menor jerarquía.</p> <p>El hecho de que los antecedentes considerados al formular el cargo no sean atribuibles al sumariado, no es óbice para atribuirle responsabilidad por la demora verificada en la presentación de la documentación relacionada con la designación del señor Martínez, única irregularidad que constituye el objeto de este sumario.</p> <p>3.- En cuanto a la reserva del caso federal, no corresponde a esta Instancia expedirse al respecto.</p>		

B.C.R.A.

Referencia
Exp. N° 101.549/10
Act.

6

4.- A tenor de las consideraciones efectuadas corresponde atribuir responsabilidad a la entidad Ford Credit Compañía Financiera S.A. y al señor Daniel Ricardo Bona.

III.- CONCLUSIONES:

1.- Que en virtud de lo expuesto corresponde sancionar a la persona jurídica y a la persona física halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41, inciso 1, de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. A los efectos de la graduación de las sanciones se tuvo en cuenta lo dispuesto por la Comunicación "A" 3579, RUNOR 1-545.

2.- Que la Gerencia Principal de Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.

3.- Que esta Instancia se encuentra facultada para la emisión del presente acto, de acuerdo a lo normado por el artículo 47, inciso d), de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, modificada por la Ley N° 26.739, aclarado en sus alcances por el Decreto N° 13/95, cuya vigencia fue reestablecida por el artículo 17 de la Ley N° 25.780.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

RESUELVE:

1º) Imponer a la entidad Ford Credit Compañía Financiera S.A. (CUIT N° 30-51654454-2) y al señor Daniel Ricardo Bona (DNI N° 13.416.837) la sanción de llamado de atención.

2º) Notifíquese y hágase saber que el presente acto resulta recurrible por revocatoria dentro de los 15 días hábiles a contar desde su notificación, en los términos del artículo 42 de la Ley N° 21.526.

SANTIAGO CARNERO
SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

do. / h

~~Tomado~~ TOMADO NOTA PARA DAR CUENTA AL DIRECTORIO

Secretaría del Directorio

10 SEP 2013



VIVIANA FOGLIA
PROSECRETARIO DEL DIRECTORIO